

Latinoamérica y Región Andina



Cra 14 # 85-68 of 604

(+57) 1 616 20 66

(+57)310-7654780

rafael. gutier rez@valicon sultores. com

javila@valiconsultores.com

Análisis de Coyuntura Política y Económica: Latinoamérica y Región Andina

Apreciado lector,

Desde VALI, una consultora de asuntos públicos y de gobierno que trabaja de la mano de sus clientes, empresas innovadoras y líderes en sus sectores, para navegar en un ambiente político, jurídico y cultural diferente que facilite y complemente sus metas; presentamos un análisis de coyuntura política y económica en Latinoamérica y la región Andina, para mostrar el contexto de estos países, teniendo en cuenta el tema de pandemia, movimientos sociales que han surgido durante este tiempo y la reconfiguración política que se puede generar en la región por temas de elecciones. El análisis que sirvió como base para este documento, es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinario que se especializa en 3 ejes fundamentales: ASUNTOS DE GOBIERNO, basado en policy advocacy, la comunicación con Gobierno y el desarrollo de escenarios políticos. Por otro lado, nuestra ÁREA DE INTELIGEN-CIA DE NEGOCIOS que se enfoca en el análisis político, análisis regulatorio y análisis de riesgo. Y, finalmente, nuestro equipo de COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA que, mediante la construcción y análisis de mapeos de medios, Stakeholders y opinión pública, identifican el manejo de mensajes y su relevancia en los asuntos legislativos a nivel nacional.

Esperamos que sea de su interés, de gran ayuda y nos interesaría mucho poder conocer sus opiniones sobre el mismo. Saludos Cordiales,

Jonathan Ávila

Socio Fundador y Managing Director

Tel: (+57) 3182312453

Correo: javila@valiconsultores.com rafael.gutierrez@valicontultores.com



presente documento es un dossier de análisis político y económico de Latinoamérica, con pecial énfasis en algunos países de la región andina como Perú, Ecuador y Colombia. La primera parte del documento presenta un panorama regional donde se reseñan de manera ejecutiva los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la situación fiscal y las demandas sociales, y se establecen algunas tendencias que marcarán la agenda de cara a la reactivación económica y las elecciones regionales del 2021 y el 2022. También se mencionan otros acontecimientos que pueden tener efectos en los próximos meses, como las elecciones en Estados Unidos. En una segunda parte, se presenta un análisis de la coyuntura política y económica de cada uno de los países mencionados con unas conclusiones al final de cada segmento.

EXECUTIVE SUMMARY – CONTEXTO LATINOAMERICANO

De todos los adjetivos, que política y económicamente pueden describir la coyuntura regional, "estable" es uno de los que menos cabe. Las numerosas elecciones todavía por celebrarse en el 2021 y el 2022, y un previsible repunte en los casos de COVID-19, no permiten anticipar un escenario regional de certidumbre. En el plano económico, la pandemia ha acentuado las vulnerabilidades preexistentes de las economías regionales y ha aumentado las perspectivas de gasto fiscal en un momento de saturación de deuda y déficits que dejan poco margen para actuar. Lo que es más grave es esta situación de crisis de las finanzas públicas que ha profundizado la necesidad de reformas estructurales en un contexto de desconfianza institucional y amplio escrutinio público. Esto debido a las demandas y tensiones sociales remanentes de la oleada de protestas del 2019, las cuales podrían profundizarse ante la ausencia de estímulos fiscales para contener los efectos de la pandemia sobre la movilidad social, el aparato productivo y la lucha contra la pobreza.

Las condiciones de la demanda global, con una contracción esperada del 4% en las economías desarrolladas, obligan a repensar las estrategias del sector externo. Ciertamente, mayores niveles de deuda a nivel global, las permanentes tensiones comerciales y el escenario político de desglobalización hacen más que necesario re-

plantear el modelo de exportaciones que ha asegurado el crecimiento regional durante los últimos años. Queda claro que la región tendrá que ajustarse rápidamente a este escenario, a través de reformas que mejoren la productividad, reduzcan la informalidad laboral, le apuesten a la progresividad tributaria y fortalezcan la capacidad de las Pymes. No obstante, estas apuestas de reforma fiscal no deben ceder ante una ola proteccionista y olvidar la importancia de mejorar de las condiciones competitivas y de internacionalización de las cadenas productivas.

El estado de animosidad social en la región es generalizado y se acrecienta a medida que los límites presupuestales, agudizados por la pandemia, restringen la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo reformas en pro de la equidad y el crecimiento inclusivo. El mes de octubre, por ejemplo, trajo consigo protestas en: México, Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina. Además, son pocos los gobiernos de turno en la región los que cuentan con niveles de favorabilidad aceptables. Sobra decir que, por esta razón, es factible que se presenten cambios de gobierno en los próximos 2 años electorales. Los países que tengan espacios fiscales moderados y en los que las protestas sociales no obedezcan a demandas en torno a cambios institucionales fuertes, como el caso chileno, estarán llamados a asumir una postura pragmática en la negociación con los sectores convocantes pues, la estabilidad política será una variable clave para fomentar un entorno económico competitivo en los próximos años.

Otra de las cuestiones a monitorear durante los próximos meses, será el efecto de las elecciones estadounidenses en la agenda regional. Un cambio de mandato implicaría una reorganización de las prioridades de política exterior en temas migratorios, ambientales y comerciales. Una victoria demócrata cambiaría los términos del relacionamiento con



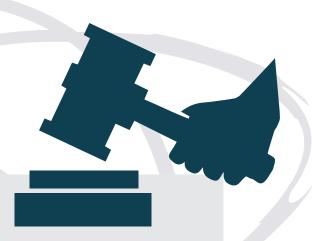
la región, implicando una flexibilización de la política migratoria, una política menos intervencionista en el plano político y un condicionamiento de las relaciones comerciales al cumplimiento de estándares laborales y ambientales. Esta elección, en últimas, tendrá efectos sobre la forma de la transición democrática en Venezuela y establecerá si es prioridad la búsqueda de alineamiento regional para contener el grado de asentamiento de las inversiones chinas. A diferencia de la agenda del gobierno actual, una administración demócrata priorizaría una agenda bilateral y de cooperación más amplia centrada en la lucha contra la pobreza y la corrupción como factores originadores de la migración.

Es importante resaltar, que algunos expertos sugieren que la situación política y económica actual ha puesto en entredicho la eficacia de las reformas de mercado adoptadas en los años ochenta, conocidas como el "Consenso de Washington", las cuales priorizaban la inversión extranjera, el control del déficit, las privatizaciones y la desregulación. Se ha propuesto desde diversas partes, un tránsito hacia un nuevo "consenso" que prime la reducción de las inequidades a través del fortalecimiento de la seguridad social, las políticas de industrialización, la progresividad tributaria, el gasto contra-cíclico para la generación de empleos y la sostenibilidad. Aunque la aplicación integral de dichas reformas está sujeta a factores contextuales, como los fiscales y de gobernabilidad, es claro que las condiciones sociales y políticas están dadas para un tránsito hacia la materialización de algunos de estos puntos en los próximos años.



COLOMBIA

¿Existe una crisis política?



Ámbito legislativo

Es importante resaltar que no existen a la fecha indicios de una crisis de gobernabilidad pues, de momento, no se cuenta con bloqueos legislativos, declives sustanciales en favorabilidad y jornadas de protesta social que hagan pensar en la reactivación del Paro Nacional. En el ámbito legislativo, el gobierno ha podido asegurar el nombramiento de sus ternados ante el Congreso para la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y el trámite de algunas de sus iniciativas prioritarias, como la reglamentación del Sistema General de Regalías, la reforma política y el Presupuesto General de la Nación.

La solidificación de la coalición de gobierno, a través del nombramiento de ministros y consejeros presidenciales, cercanos a estos partidos, en carteras como ambiente y justicia, le permitirá mantener un bloque legislativo fuerte para el trámite de su agenda legislativa. Prueba de lo anterior, las buenas relaciones con el legislativo fueron puestas a prueba el 22 de octubre, fecha para la que se convocó la discusión de la moción de censura al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. De momento los partidos de gobierno han manifestado su oposición a la moción, incluyendo a Cambio Radical.



Percepción ciudadana

Cuando se analizan las encuestas de percepción ciudadana, el manejo de la pandemia y la reapertura paulatina de la economía le han asegurado al presidente unos rangos de favorabilidad aceptables. En las últimas mediciones de Guarumo y Ecoanalítica, el 51,2% de los encuestados tiene una imagen favorable del presidente y el 61,9% está de acuerdo con el manejo frente a la pandemia.



Protesta social

Es importante resaltar que la reactivación de la protesta social era previsible una vez se relajaran las medidas de distanciamiento. No obstante, las movilizaciones convocadas para el Paro Nacional del 21 de septiembre de este año, no tuvieron el éxito esperado por los organizadores. Estas se venían gestando tras la expedición del Decreto del "Piso Mínimo Social", el cual flexibilizaba los aportes parafiscales para trabajadores en tiempo parcial. El Comité Nacional del Paro consideraba que el Decreto era un intento del Gobierno Nacional de expedir una reforma laboral evadiendo las discusiones legislativas, razón por la cual decidió levantarse de la Misión de Empleo. Posterior a esto, los organizadores intentaron infructuosamente acumular estas demandas con las que emergieron en las movilizaciones en contra del abuso policial, buscando ampliar su poder de convocatoria.

Pese a lo dicho, el Gobierno es consciente de que existe un considerable descontento social en torno a la situación del mercado laboral, la economía, la corrupción y el medio ambiente. Sabe que en la medida que estos temas continúen desatendidos en el tiempo habrá mayores sensibilidades sociales que podrían efectivamente hacer eco del Paro Nacional y complejizar las discusiones alrededor del trámite de reformas esenciales para la reactivación económica. Es por esta razón, que se ha mostrado concesivo respecto al Comité Nacional del Paro, anunciando modificaciones al Decreto del "Piso Mínimo Social" en espera de la reincorporación de las centrales obreras a la Misión de Empleo antes del nuevo Paro Nacional.

Así mismo, de manera pública, ha ratificado el compromiso de cumplir con los acuerdos alcanzados en el Gran Diálogo Nacional sostenido antes de la pandemia, como la ratificación del Acuerdo de Escazú. Recientemente, el gobierno envió una comitiva ministerial a atender personalmente la minga indígena en Cali, mostrándose abierto frente a la ciudadanía y en condiciones de atender el diálogo de manera directa con los sectores representativos. Al tiempo que ha hecho visibles estos intentos de movilización, también ha reiterado que no cederá ante las pretensiones políticas de algunos sectores.



Minga indígena y Paro Nacional

Tras intentos fallidos de diálogo en Cali, la minga indígena decidió continuar su camino hacia la ciudad de Bogotá, con el fin de reunirse personalmente con el presidente Iván Duque y exponerle un pliego de peticiones que incluía desde un debate político hasta la prevención de asesinatos de líderes sociales. Tras su convocatoria, el Gobierno nacional ha señalado la infiltración de milicias del ELN en este movimiento de protesta, de cerca de 8.000 indígenas, y ha sido reiterativo en la negativa de ceder a algún ultimátum o a reunirse hasta no desistir de las pretensiones de realizar un debate político al Presidente Iván Duque.

A diferencia de otras ocasiones donde las demandas eran puntuales, el pliego contenía puntos de interés nacional, fácilmente articulables con los del Comité Nacional del Paro. Esto hacía pensar en una jornada amplia de movilización el 21 de octubre, un momento político que pondría al Congreso de la República en una posición de accountability respecto a algunas discusiones relevantes como el Acuerdo de Escazú, la moción de censura del Ministro de Defensa y algunos proyectos de la agenda ambiental. No obstante, el mismo día de la movilización social, la minga indígena tomó la decisión de salir de la capital, continuar la movilización en los territorios y apalancarse en la jurisdicción indígena para hacer un juicio al Presidente.



Aunque la minga ganó visibilidad política, su retiro le restó impacto a las manifestaciones del Comité Nacional del Paro, el cuál convocó otras manifestaciones para el 21 de noviembre del 2020. Cabe resaltar que si existe un rebrote del COVID-19, el gobierno podría declarar el Estado de Conmoción Interior o de Emergencia Económica, lo que le permitiría tener facultades extraordinarias para la mitigación de la crisis.

Así mismo, el Paro Nacional puede estar perdiendo impulso político por la falta de representatividad del Comité, por la desarticulación del movimiento estudiantil y el costo frente a la opinión pública de paralizar la economía en plena reapertura. En cualquier caso, la convocatoria de intentos masivos de Paro sin una movilización sustancial que conlleve a negociación benefician al gobierno nacional y quitan presión política al Congreso de la República. No obstante, también es importante resaltar que el paro del 21 de octubre contó con mayor movilización que el de septiembre y que puede reactivarse en los próximos meses.



Propuestas de referendo y utilización discursiva de la protesta social

La marcha del 21 de octubre, permitió avizorar un fenómeno político que se anticipa como recurrente en el año 2021, la utilización política y con fines electorales de la protesta social. Por su parte, el ex presidente Álvaro Uribe había señalado semanas antes que la minga tenía por objetivo la "toma socialista del Estado", en un esfuerzo por atizar la polarización y promover su propuesta de referendo para derogar la JEP, reducir el tamaño del Congreso y ampliar el ingreso solidario. Por otra parte, los miembros de la bancada socialdemócrata, que estarían en vísperas de crear su partido político, anunciaron su apoyo a la jornada de protestas mientras invitaron a apoyar un referendo para: la creación de una renta básica, subsidios a la nómina de micro empresas, el establecimiento de un marco tributario progresivo y el apoyo a la educación pública. Sergio Fajardo, por su parte, también criticó la gestión y falta de diálogo del gobierno con la minga indígena, al comparar la situación actual con una hipotética aproximación con la misma, si él fuese presidente. Virtualmente, esto representa el lanzamiento de su candidatura para 2022. Con estos movimientos, estos sectores políticos comienzan a allanar el camino de las campañas presidenciales para el 2022.



¿Existe una crisis económica? ¿Qué plantea el Gobierno nacional para su solución?

Nuevo Compromiso por Colombia

Si bien han existido repuntes en algunos indicadores macroeconómicos, estos responden principalmente al ciclo expansivo de la economía tras el relajamiento de las medidas sanitarias. Este es el caso del desempleo, que bajó al 16,8% después de ubicarse en el 20,2% reportado en julio. No obstante, condiciones estructurales de la economía como el pronunciamiento del déficit fiscal por la caída de ingresos en el mediano plazo y el deterioro del mercado laboral, permanecen con las mismas dificultades y sin lineamientos claros a pocos meses de la revisión de la calificación de riesgo por parte de S&P y Moody's. Las agencias han sido enfáticas en la necesidad de conocer los detalles de una reforma tributaria estructural antes de emitir sus calificaciones entre diciembre y el primer trimestre del año próximo, de manera que el país no pierda el grado de inversión.

El Gobierno, por lo pronto, ha socializado los pilares del CONPES de reactivación económica y el "Nuevo Compromiso por Colombia", plan que incorpora estímulos fiscales por valor de \$150 Billones de pesos que tienen el objetivo de promover el crecimiento de sectores con efecto multiplicador sobre el empleo y la productividad. Los recursos del mencionado plan serán públicos en un 60% y buscan generar dos millones de empleos en los próximos años. Así mismo, se incorporan inversiones en 35 proyectos de infraestructura en carreteras 5G, vías terciarias y el pacto bicentenario.



Crecimiento sostenible

En el pilar de sostenibilidad se plantea la introducción de un Proyecto de Ley de Crecimiento verde que establece contribuciones y tributos para industrias con altas emisiones de CO2. La radicación de la iniciativa estaría planteada para la segunda mitad del 2021, una vez se presente para discusión legislativa la reforma tributaria estructural, la cual tendrá como insumos las recomendaciones de la Comisión de Estudios de Beneficios Tributarios. Las calificadoras de riesgo han solicitado al gobierno no demorar la introducción de tales reformas, pues el país enfrentará riesgo político como consecuencia del año pre-electoral. Otras estrategias de reactivación, incorporan el robustecimiento de programas sociales y del fortalecimiento del "Compromiso con el campo", el cual incluye la concreción del catastro multipropósito, inversiones en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y bienes públicos rurales.





Mejores condiciones competitivas para las PYMES

El gobierno también está a la espera de la aprobación legislativa de una Ley de Emprendimiento que busca alivianar las cargas y trámites, mejorar las condiciones de financiamiento, asegurar paridad en el mercado de compras públicas y fomentar la formalización de las Pymes en Colombia. En la agenda legislativa del gobierno también se plantea la radicación de una Reforma al Mercado de Capitales, que buscaría garantizar su eficiencia y aumentar las posibilidades de financiamiento por vía bursátil a las empresas.

Política Monetaria

En el ámbito monetario, el Banco de la República ha mantenido las tasas de interés en sus mínimos históricos, cercanos al 1,75%, con el fin de aportar al ciclo expansivo de la economía y alentar la recuperación económica. Recientemente, el Banco anunció que el gobierno había obtenido la expansión de la línea de crédito flexible frente al Fondo Monetario Internacional hasta los \$17.300 millones de dólares, de los cuales se estaría planteando realizar un desembolso de \$5.300 millones en los próximos meses para incorporar a las finanzas públicas.



Conclusiones:

Aunque no existen bloqueos legislativos, niveles desfavorables de aprobación o protestas sociales que hagan eco del Paro Nacional del 2019; en el panorama político ya empiezan a avizorarse sensibilidades sociales y rompimientos políticos de ciertos sectores de cara a la campaña presidencial del 2021. La convocatoria a referendos y el uso político de la protesta social para polarizar o generar convergencias, hacen parte de las estrategias recientemente empleadas.

El gobierno sigue manteniendo una buena relación con el legislativo. No obstante, el auge de la protesta social podría aumentar los costos políticos de ciertas decisiones del Congreso. La movilización social podría poner presión sobre las discusiones legislativas de mociones de censura, la aprobación de mecanismos de participación ciudadana - Acuerdo de Escazú, reformas a la política social y otras de corte ambiental como la prohibición del glifosato o la prohibición de semillas transgénicas.



Aunque todavía las movilizaciones sociales no han alcanzado el nivel de convocatoria del 2019 y los organizadores no han logrado poner al gobierno nacional en una posición de negociación, es posible que el escenario pre-electoral y algunas discusiones de reformas para la reactivación económica, acrecienten su representatividad.

El Gobierno nacional tendrá que mantener su coalición dentro del Congreso mientras aumentan las consideraciones individuales y electorales, de aquí que algunas calificadoras de crédito prevean riesgo político para la estrategia de reactivación económica y el paso de la reforma tributaria. El riesgo político comienza a ser una variable relevante en la determinación de la calificación crediticia hacia finales de año o principios del próximo.

Debe tenerse en cuenta que en ambos referendos se plantea la ampliación del asistencialismo social. En un contexto de déficit fiscal como el presente, tales propuestas podrían requerir de esfuerzos fiscales sustanciales, lo que tendría impacto sobre una eventual reforma tributaria.

Una de estas propuestas de referendo ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar el marco tributario con el objetivo de hacerlo menos regresivo para las Pymes. Demandas que no son disonantes con algunas propuestas tributarias para aumentar las cargas tributarias a la gran empresa. Es previsible el aumento discursivo del proteccionismo del mercado local en el marco de la reforma.

ECUADOR

A. Panorama económico

1. Situación económica pre COVID -19

Ecuador mantuvo crecimiento económico y reducción de la pobreza entre el 2004 y 2014, debido a los altos precios del petróleo. Sin embargo, la caída de sus precios generó un desequilibrio macroeconómico caracterizado por la ausencia de ahorros fiscales. Así, han recurrido al apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De tal modo, han impulsado un programa de reformas para asegurar la sostenibilidad fiscal, fortalecer la dolarización, impulsar la inversión privada y garantizar la protección social a los más vulnerables.

No obstante, su implementación ha enfrentado diversos desafíos como la pandemia del COVID -19 y el desplome de los precios del petróleo; lo que provocó una contracción económica, aumento de la pobreza y elevación de la tasa de desempleo.



2. Impacto económico de la pandemia

En julio el FMI estimó que el PIB ecuatoriano decrecerá 10,9% en el 2020. Eso significa un decrecimiento 4,6% más de lo estimado en abril de este año, cuando el FMI proyectó que la economía del país caería un 6,3%. En el primer trimestre de 2020 el PIB mostró una tasa de variación negativa de 2.4%, en relación al primer trimestre de 2019 (t/t-4) y una tasa de -2.1% respecto al trimestre anterior (t/t-1).

Ahora bien, en términos de desempleo para el periodo mayo -julio de 2020 la tasa de desempleo se ubicó en el 16,8%, con un crecimiento comparado con la tasa de desempleo para diciembre de 2019 del 4,9%.

Respecto a las exportaciones, durante el período enero – julio de 2020, alcanzaron USD 11,113.1 millones, cifra 14.4% inferior respecto a las ventas externas realizadas en el mismo período de 2019 (USD 12,989.6 millones). Por su parte, las importaciones entre enero y julio de 2020 fueron de USD 9,584.0 millones, lo que representa un 24.9% menos que las compras externas realizadas en el mismo período del año 2019 (USD 12,769.1 millones).

En abril de 2020, el índice de precios al consumidor registró una inflación mensual de 1,00%, una inflación anual de 1,01% y una inflación acumulada de 1,28%. Tanto la inflación mensual, como la anual y la acumulada, fueron mayores a las registradas en abril del año 2018 y 2019.

Por otro lado, el sector petrolero es el más afectado, pero se estima su recuperación en el III trimestre de 2020. Según proyecciones de la firma Pwc se espera un crecimiento del PIB del 3,9% para 2021, mientras que el FMI, proyecta una recuperación de 6,3%. Será el segundo país que mejor se recuperará, detrás de Perú, que crecerá un 7,3%.



3. Medidas para la recuperación

- Financiamiento y liquidez: Diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias sin costos adicionales ni comisiones para el cliente y comprende: refinanciación, restauración o renovación de operaciones de crédito con plazos de 1 año y 1 año y medio.
- •La salida para la recuperación económica se ha enfocado en el financiamiento internacional a partir de medidas como:

- a. Gestión de recursos necesarios para salvaguardar la vida y la salud de los ecuatorianos. Acuerdos con Organismos Multilaterales, USD 120 millones de dólares para fortalecer el sistema de salud y protección social.
- b. Recepción de USD 2.000 millones en fondos de créditos internacionales: USD 500 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 500 millones del Banco Mundial (BM) y USD 1.000 millones de China.
- c. Ahorro temporal de USD 811 millones. Por el pago de los intereses diferidos hasta agosto, que será destinado para atender las necesidades por la emergencia sanitaria.



4. Posibilidad de una reforma tributaria

En la actualidad, el déficit fiscal de Ecuador se encuentra cercano a los 8300 millones de dólares, deuda que para el final de 2021 deberá estar en 2900 millones de dólares y ya para 2022 se espera tener un saldo positivo de 600 millones de dólares.

Entre lo acordado con el FMI, el siguiente Gobierno deberá presentar una reforma tributaria, ante la Asamblea, en la que se buscará recaudar 2% más del PIB orientando al impuesto a la renta. Además, deberá trabajar en una reforma al sistema de seguridad social y laboral. Sin embargo, el gobierno de Moreno ya ha presentado discusiones y avances.

Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez anunció cuáles serán las medidas a mediano y largo plazo que se tomarán, buscando cumplir con los pagos al Fondo Monetario Internacional. De tal manera, la reforma fiscal buscará disminuir el déficit fiscal y ordenar las finanzas públicas.

Por último, vale la pena destacar que además del préstamo del FMI se espera que China pueda entregar 1700 millones de dólares de los cuales 1100 serán créditos atados al petróleo y los restantes 600 mediante el Banco de Desarrollo de China.

B. Situación socio política

Ecuador entró en un momento de crisis sociopolítica en 2018, cuando inició el mandato del actual mandatario Lenin Moreno, de Alianza País, asumió la presidencia. Esta se explica a partir de dos factores:

1

Históricas confrontaciones políticas y ausencia de un sistema de partidos fuertes.

Desde 2005, Ecuador atraviesa un clima político inestable, en donde los sectores políticos, constantemente, buscan generar bloqueos institucionales para que sus contrincantes deban abandonar el Gobierno, o bien, queden imposibilitados electoralmente. Aunque el Expresidente Rafael Correa, logró una significativa estabilidad y cohesión social y política, tras abandonar su cargo, ha sido uno de los actores que más ha fomentado la renuncia de Lenin Moreno, así como movilizaciones sociales que no cesan desde 2018.

Ecuador cuenta con más de 200 partidos políticos, los cuales tienen un periodo de vida muy corto que son liderados por caudillos políticos regionales y locales, pero sin capacidad política nacional. Así, la atomización extrema deriva en una crisis de representación ciudadanía e incapacidad para canalizar demandas. Esto lleva a la desafección política y a la movilización social.

La división política en Ecuador se agudizó en las elecciones locales, ya que Moreno no obtuvo prefecturas y alcaldías importantes para conformar un bloque partidista fuerte que le permita estabilidad política. Actualmente se vive una importante confrontación entre lo local y lo nacional, ya que Correa, quien se volvió un fuerte opositor del presidente Moreno, recuperó espacio político a través de prefecturas importantes como la de Guayas o Pichincha.



Pérrea oposición del Expresidente Rafael Correa.

Resulta clave mencionar que Correa dio su apoyo a Moreno para que se convirtiera en su sucesor, tras dos periodos presidenciales de aparente estabilidad económica y política. Sin embargo, Moreno ya en el gobierno, adoptó una agenda cercana a la derecha ecuatoriana, lo cual fracturó la relación con Correa. Además, Moreno realizó denuncias en contra de Correa por casos de corrupción lo que ha llevado a que las principales fuerzas políticas del país se confronten constantemente, impidiendo avanzar una agenda política clara. Por el contrario, los temas de mayor atención en Ecuador se relacionan con la crisis política del país, el caso de Correa (el cual fue condenado a 8 años de prisión) y la crisis económica que el país vive actualmente, y se pronunció con la llegada del Covid-19.

Baja favorabilidad para Lenin Moreno y escenario electoral 2021.

Con una tasa de aprobación menor al 10%, Moreno no cuenta con ningún tipo de respaldo popular ni con la legitimidad suficiente para impulsar medidas y reformas estructurales, como es el caso de la necesaria reforma tributaria que se debe aprobar en el país ante la creciente deuda asumida y las altas cifras de desempleo, que superan el 16%.

Las distintas fuerzas políticas en Ecuador (salvo Alianza País), se han distanciado del Gobierno, pues su baja popularidad genera un alto costo político de cara a las elecciones. Esto supone que Moreno no tendrá un panorama claro de favorabilidad ante la Asamblea Legislativa para impulsar las reformas para la reactivación económica. Aunque cuenta con una bancada de 51 asambleístas, suficientes para no afrontar una moción de censura, este número no es suficiente para aprobar las reformas del ejecutivo.



Adicionalmente, el escenario electoral de 2021, ha logrado reducir las movilizaciones sociales, las cuales, aunque continúan desarrollándose, han perdido capacidad e influencia. La incertidumbre de quién asumirá la presidencia en 2021, ha disminuido las protestas en contra del Gobierno de Moreno.

Así, de cara a 2021, se prevé un escenario de continuidad de la crisis sociopolítica que se irá agudizando conforme se acerquen los comicios en Ecuador. De igual manera, se espera que la agenda política del país no avance en temas específicos, sino que, se centre en la resolución de la crisis económica, las altas cifras de desempleo e informalidad. Finalmente, aunque la protesta social continuará vigente, ésta no tendrá mayor incidencia en la toma de decisiones del Gobierno y los partidos políticos, ya que la atención, en este sentido, estará centrada en las elecciones legislativas y presidenciales.



• Guillermo Lasso Mendoza (CREO):

Candidato de derecha. Quedó segundo en las elecciones de 2017, por detrás de Lenin Moreno. Exgobernador de Guayas y Ministro de Economía.

• Fabricio Correa (Mov. Justicia Social):

Candidato de Centro derecha. Aunque es hermano de Rafael Correa, en el ámbito político son lejanos y casi opositores, pues este candidato ha denunciado varios escándalos de corrupción en el gobierno de Correa.

• Gustavo Larrea (Democracia Sí):

Candidato de Centroizquierda. Ex-diputado. Hizo parte del partido Alianza País (actual partido de Gobierno). Hizo parte del Gobierno de Correa, pero se separó tras los inconvenientes de corrupción y la ruptura de Lenin Moreno con el Correísmo.

Andrés David Aráuz (Unión por la Esperanza):

Candidato de Izquierda. Fue Ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano en el Gobierno de Correa. Trabajó activamente temas financieros en dicho periodo.

Conclusiones:

La implementación de reformas enfrenta dos desafíos: la pandemia del COVID - 19 y el desplome de los precios del petróleo. Lo que provocó una contracción económica y un aumento de la pobreza y de la tasa de desempleo. Por su parte, el gobierno ha solventado la crisis con préstamos de organismos multilaterales; por tanto, se prevé una reforma tributaria para solventar las finanzas públicas y disminuir el déficit fiscal.

La crisis sociopolítica se agudizará hacia las elecciones de febrero 2021, ya que la baja confianza en el Gobierno ha ocasionado manifestaciones sociales y un alto costo político para Moreno.

La división y atomización de los partidos políticos y la baja capacidad de gobierno ha imposibilitado la consolidación de agendas de acción claras, evidenciando un bloqueo institucional que concentra sus esfuerzos en la crisis económica y las demandas sociales agregadas.

PERÚ

Panorama económico

Situación económica pre COVID -19

La economía peruana presenta dos fases de crecimiento. i) Entre 2002 y 2013, mantuvo uno de los mayores dinamismos en la región, con un crecimiento promedio del PIB de 6.1% anual. ii) Entre 2014 y 2019, la economía se desaceleró a un promedio de 3.1% anual como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas, principalmente el cobre (BM, 2020).

El déficit en cuenta corriente disminuyó de 4.8% del PBI en 2015 a 1.5% en 2019, debido a que las reservas internacionales facilitaron una gestión ordenada del tipo de cambio. Asimismo, la maduración de los proyectos gestados, durante los años previos, impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna (Cifras del BM, 2020).

Este déficit externo ha venido siendo financiado, principalmente, con el ingreso de capitales de largo plazo. Por su lado, las reservas internacionales netas se han mantenido estables y, hacia marzo de 2020, ascendieron a 30% del PBI (Cifras del BM, 2020).





- Para octubre, el país alcanzó los 890.000 contagios y 34.000 fallecidos, con la tasa de mortalidad relativa más alta del mundo. No obstante, a la semana 33 de la pandemia mantiene su tendencia a la baja en el número de casos nuevos y fallecimientos diarios.
- La economía peruana se desplomó un 30,2 % en el segundo trimestre del año, una de las mayores caídas del Producto Interno Bruto desde que se tienen registros históricos.
- En septiembre la variación del empleo se encontraba en -23,8% (INEI 2020). En gran medida por su alto nivel de informalidad.
- En el primer semestre de 2020 las exportaciones ascendieron a US\$ 16 930 millones, lo que representó una reducción de 25,9% respecto al resultado alcanzado en igual periodo de 2019. Esto se debe a los menores volúmenes exportados de productos tradicionales, principalmente mineros (cobre, oro, zinc), petróleo y derivados, y harina de pescado.

Se proyecta que la inflación anual se reduzca en los siguientes meses debido al impacto negativo de los choques de demanda, ubicándose transitoriamente por debajo del rango meta a fines de 2020 (0,8 por ciento).

- En el periodo comprendido entre enero y agosto de 2020:
- a) El nivel general de precios aumentó 1,24%, a un ritmo mensual promedio de 0,15%.
- b) Los precios de alimentos y bebidas incrementaron en 1,81%, mientras que los de la energía se redujeron en 1,74%.

Medidas para la recuperación

- Programa Reactiva Perú: Monto total del programa de garantías del gobierno asciende a US\$ 16,9 mil millones (8,4 por ciento del PBI), mediante el cual se han desembolsado créditos por US\$ 15,2 mil millones (7,5 por ciento del PBI).
- El gobierno ha implementado varios programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a sectores como el turismo y el de agricultura familiar. FAE-Turismo y FAE-Agro, de garantías de hasta S/ 1 500 y S/ 2 000 millones. Así como la ejecución de Núcleos Ejecutores (NE) con 455 millones de soles, líneas de financiamiento del fondo AgroPerú con 440 millones de soles, impulso de pastos cultivados con 98.7 millones de soles, Seguro Agrícola con 68 millones de soles y mercados itinerantes con 17.9 millones de soles.
- La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló a principio de septiembre ante el Congreso, que el Ejecutivo había designado un gasto de 67.199 millones de soles (unos 19.199 millones de dólares), el 20 % del PIB, al plan de reactivación y contención económica para hacer frente a la pandemia.

Proyección

- Según el Banco Central de Reserva del Perú, para 2020 se prevé una contracción de la actividad económica, sustentada en el debilitamiento de la economía de sus socios comerciales, menor confianza empresarial y los efectos contractivos de la cuarentena. Estos efectos serían parcialmente compensados por las medidas de política fiscal y monetaria de carácter expansivo.
- Para 2021 el Banco Mundial espera un crecimiento del 7%, debido, principalmente, a una mejora en la confianza empresarial y en el crecimiento de sus principales socios comerciales presentando, así, una recuperación paulatina, pero sostenida, del nivel de actividad económica.



Se prevé una contracción promedio de la demanda interna de 12,3 por ciento en 2020, lo que implicará una caída del PBI de 12,7 por ciento. Esta proyección es ligeramente mayor a la del Reporte previo en razón a la menor ejecución de la inversión pública observada en el primer semestre y al retraso de la fase 4 del plan de reinicio de actividades, que implicaría una recuperación más gradual del empleo. En 2021 el crecimiento del PBI ascendería a 7% en gran parte por las medidas de estímulo sobre el gasto privado, la reanudación de proyectos de inversión pública, la recuperación de la confianza y las mejores condiciones del mercado laboral y de la demanda global.

Situación socio política

Contexto general de la agenda política del Gobierno Peruano

Actualmente el contexto político en Perú se caracteriza por una constante volatilidad e inestabilidad que se presenta desde las elecciones generales en 2016, pero con ciertas variaciones dependiendo de las coyunturas económicas y sociales. Esta inestabilidad se caracteriza por las confrontaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo ya que el Presidente Vizcarra no cuenta con un partido ni una bancada en el legislativo que le permita consolidar su gobernabilidad.





Antecedentes de la crisis política:

La oposición de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por parte de Keiko Fujimori en 2016 agudizó la crisis institucional peruana. Esta última obtuvo la mayoría de escaños en el Congreso, lo que significó una desconexión inicial entre poderes cuando la fuerza opositora contó con la capacidad para ejercer un control político estricto a PPK.

Esto llevó en 2018 a que PPK renunciara al cargo, tras revelarse su participación en el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht. Tras su renuncia, Martín Vizcarra asumió la presidencia para el resto del mandato.

Pese a ello, el fujimorismo mantuvo la fuerza opositora en el Legislativo lo que generó un constante conflicto entre ambos poderes, imposibilitando adelantar acciones concretas de Gobierno.

En 2019, el Congreso negó la confianza al presidente para reformar la manera en que son designados los Magistrados. Así, en octubre, Vizcarra usó un instrumento constitucional que le permite disolver el Congreso. Además, citó a elecciones legislativas en enero de 2020 para aumentar la confianza hacia el legislativo y la gobernabilidad. Así, aunque en enero el fujimorismo perdió la mayoría, ningún partido tomó ese lugar como fuerza mayoritaria, manteniendo así, la atomización del sistema de partidos y la confrontación.



El revanchismo tras la disolución del Congreso caracteriza la relación de confrontación de poderes. Esto ha llevado a varias mociones de vacancia contra ministros, e incluso, contra Vizcarra. Entre los citados se encuentran:

- Moción de censura en contra de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por presuntos malos manejos de los recursos del Estado durante la pandemia del Covid-19. La moción fue rechazada en el Pleno.
- El Congreso negó la investidura al Gabinete Ministerial de Pedro Cateriano, tras obtener únicamente 35 votos a favor y 53 en contra. Así, Cateriano abandonó el cargo tras 20 días de haber asumido como Jefe de Gabinete.
- La moción de vacancia presidencial, tras presentarse en el Congreso una serie de audios que evidenciaban supuestos hechos de corrupción en la contratación del cantante Richard "Swing" Cisneros. En estos Vizcarra ordenaba a su Secretaria General decir que él no se había reunido con Cisneros.

Aunque la moción de vacancia presidencial fracasó para no dañar la institucionalidad durante la pandemia, no significa que hayan aumentado los niveles de gobernabilidad o se reduzca la atomización del Parlamento.

Pese a ello, no se evidencia un aumento en la protesta social, debido a la desafección existente hacia las instituciones. Esto se evidencia en los altos niveles de abstencionismo en las elecciones legislativas extraordinarias de enero, en donde la participación fue cercana al 70%. Incluso cuando el voto es obligatorio, la participación suele ser del 80%.

Por otro lado, las elecciones del 2021 acentuarán la crisis política y de representación peruana, ya que los partidos políticos buscarán ganar espacio en la agenda política de cara a abril próximo. Así, los temas de reactivación económica, fortalecimiento del sistema de salud o infraestructura estarán en constante movimiento en el Congreso peruano, el cual, pese a la atomización de los partidos, se ha caracterizado por presentar una fuerte oposición al Gobierno de turno.



Los precandidatos presidenciales que hasta el momento han sido anunciados para el 2021 son:

Daniel Salaverry:

Fue presidente del Congreso. Es precandidato por Somos Perú a pesar de que los miembros del partido han negado su respaldo por las investigaciones constitucionales.

• Keiko Fujimori:

Pese a encontrarse bajo comparecencia por el caso Odebrecht, aspira participar en las elecciones con Fuerza Popular.

• APRA:

Existen 04 precandidatos a la presidencia en el partido: Nidia Vílchez y Omar Quesada, dirigentes partidarios; el Exministro de Salud, Abel Salinas y Rafael Zevallos, militante del partido.

• George Forsyth:

Pertenece a Restauración Nacional. Renunció a la alcaldía de La Victoria.

• Daniel Urresti:

Congresista por Lima del partido Podemos Perú.

• Julio Guzmán:

Se postuló a la presidencia en 2016 por el partido Todos por el Perú.

• Ollanta Humala:

Pertenece al Partido Nacionalista Peruano. Presidente del Perú en 2011.

• Hernando de Soto:

El director del Instituto Libertad y Democracia postula con Avanza País.



Conclusiones:

Para 2021, se espera un crecimiento cercano al 3,6% en los sectores de agricultura y actividad pecuaria, lo que ayudaría en el incremento del presupuesto público. Pese a la crisis, el sector ha tenido un buen rendimiento, siendo una de las grandes apuestas para la recuperación económica del país.

La inestabilidad política en el país persistirá hasta el 2021 a causa de la atomización de los partidos políticos en el Congreso, la ausencia de una bancada oficialista y la confrontación entre poderes.

Adicionalmente, el Presidente Vizcarra no posee una agenda clara de gestión. Ante la ausencia de partidos que lo respalden, se ha centrado en la defensa de su gabinete y el manejo de la pandemia, lo cual imposibilita generar consensos más allá de la reactivación económica.

La carrera presidencial del 2021, agudizará la crisis política del país, entendiendo que personalidades políticas buscarán sobresalir en estos meses próximos a las elecciones, lo cual dejará a Vizcarra con menores posibilidades de generar un consenso en el Legislativo. Cabe destacar que en noviembre se discutirá sobre la aprobación de la moción de vacancia al Presidente presentada por el congreso.











